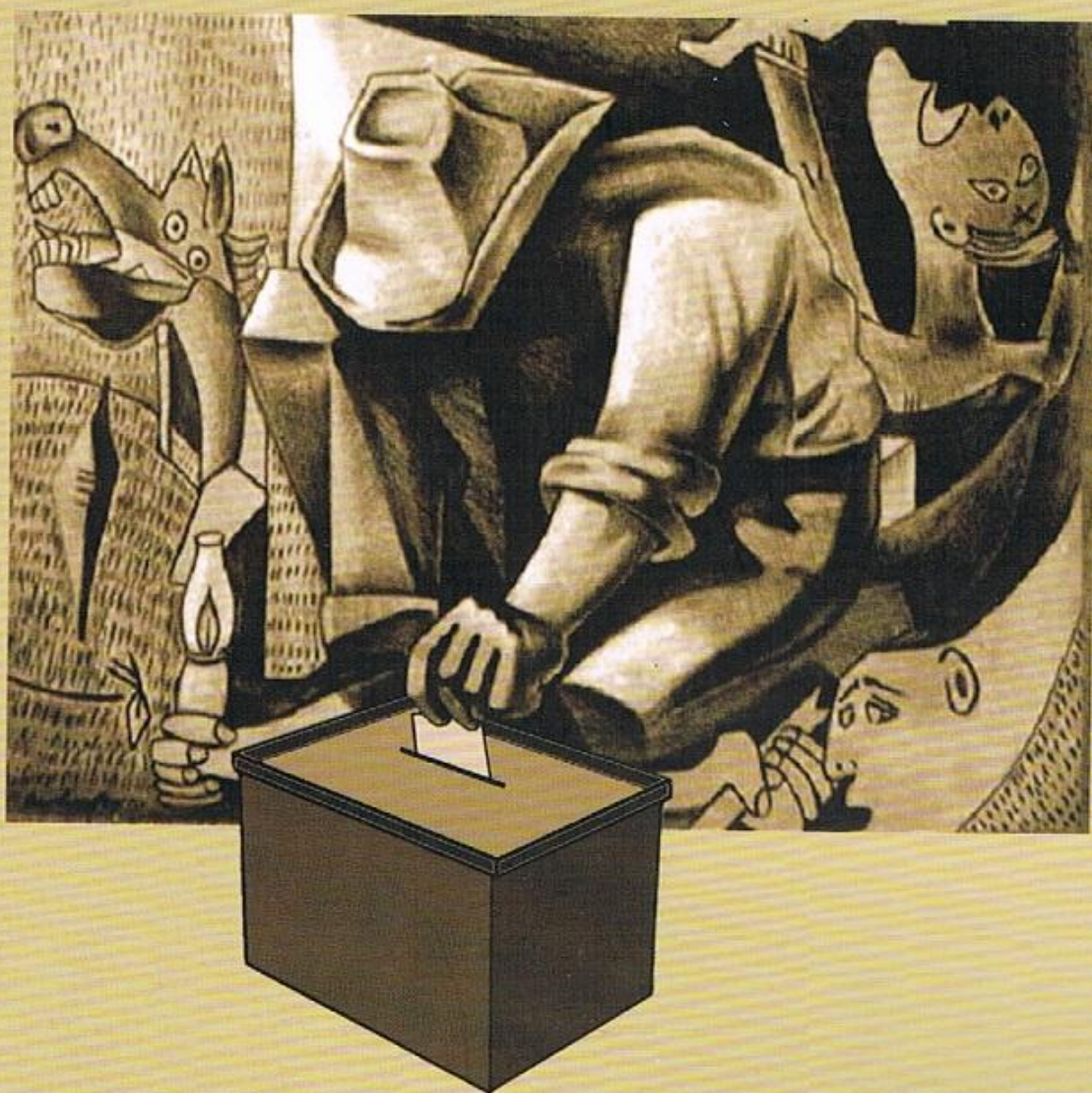


# Elecciones y legitimidad democrática en América Latina

Fernando Mayorga  
(compilador)



UMSS  
CE  
SU

  
IESE

  
CLACSO

  
plural  
EDITORES

# Crisis de representación, movilizaciones sociales y elecciones presidenciales 2013 en Chile

*Manuel Antonio Garretón M.\**

Nos proponemos en este artículo reflexionar sobre el significado de la cuestión de la crisis de representación y analizar algunos rasgos de la relación clásica entre política y sociedad en Chile y sus transformaciones actuales.<sup>1</sup>

## **La crisis de representación: cuestiones conceptuales**

La teoría de los sistemas democráticos supone que hay una adecuación entre una base social o categoría social, que se representa políticamente a través de agentes, principalmente partidos, y los mecanismos para realizar tal representación.

---

\* Sociólogo y politólogo por la Universidad Católica de Santiago y Doctorado en L'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. Profesor titular de la Universidad de Chile. Ha sido director y decano de diversas instituciones académicas, profesor en universidades extranjeras y participado y dirigido múltiples proyectos de investigación. Ha obtenido becas de investigación, como Guggenheim, FLACSO, Fundación Ford, Social Research Council, CLACSO y CONICYT. Asesor y consultor de diversas instituciones nacionales e internacionales y miembro de organizaciones profesionales y académicas, revistas y jurados en varios países. Ha publicado numerosos libros y artículos referidos a la realidad política, cultural chilena y latinoamericana y al desarrollo de las ciencias sociales. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en 2007.

1 Ver Garretón (2011, 2013 y 2014).

La fórmula clásica democrática sobre el tema de la representación (con variaciones por supuesto según los distintos modelos) es que hay un conjunto de actores, que tienen una representación en la escena política a través de una institución principal que es el sistema de partidos, y que hay mecanismos que aseguran esa representación, que son los mecanismos fundamentalmente electorales, aunque puede haber otros.

En relación a esta formulación es necesario diferenciar lo que podríamos llamar problemas de representación de lo que se define como crisis de representación. Los problemas de representación en las democracias liberales han existido siempre. En cambio, la palabra "crisis" significaría que algo está quebrándose y que se avecinan transformaciones de diversa naturaleza en ese campo. Las crisis no necesariamente son terminales, pero ellas suponen una agudización importante de contradicciones y tensiones, en un determinado periodo o en una determinada coyuntura.

¿A qué nos referimos, entonces, cuando hablamos de crisis de representación? Por un lado, a una crisis de legitimidad y, por otro, a una de tipo orgánico y de funcionamiento. Ambas están relacionadas pero son diferentes.

La crisis de legitimidad tiene que ver con lo que llamamos "representatividad" y sus diversas dimensiones. Pero, ¿qué es lo que se representa? Podemos señalar al menos tres dimensiones de la representatividad hoy en crisis.

En primer lugar se representan actores o categorías sociales, que pueden ser individuos o pueden ser actores colectivos organizados, y, entonces, lo que puede afirmarse es que aunque todavía esto exista, hoy día estamos en presencia del paso de los actores clásicos organizados a actores nuevos: los actores individuales que se expresan en público como suma de individuos y menos como categoría social; sectores sociales que se constituyen en torno a una determinada necesidad o interés que se expresa en una demanda social, como puede ser por ejemplo la necesidad de consumo; y las identidades o actores identitarios. En la actualidad, los actores que estuvieron en la base del sistema de representación democrática clásica, como fueron principalmente las clases sociales o

los ciudadanos (no los individuos), están debilitados básicamente por transformaciones de diversa naturaleza: productivas, culturales, procesos de mundialización y modernizaciones liberales que tienden a la individualización. En su reemplazo, predominan los individuos y grupos de interés. Los individuos e identidades son difícilmente representables y los grupos de interés sólo buscan representarse corporativamente, y muchas veces los ciudadanos más ligados a cuestiones de consumo o necesidades, que de ciudadanía y derechos, rechazan ser representados. Todo ello va en desmedro de la representación política.

La segunda cuestión que se representa son intereses, y los intereses tienen que ver en general con grupos organizados, con agrupaciones de intereses. Entonces hay organizaciones que representan intereses como, por ejemplo, los sindicatos, pero a su vez estos intereses forman parte de una cierta demanda social agregada, puesto que detrás de los intereses puede haber objetivos de cambio más profundos, como por ejemplo la demanda de una nueva relación laboral. Dicho tipo de demanda está orientada por el interés de cambiar algo de la estructura en el cual ese interés es significativo. Sin embargo, estas relaciones orientadas por intereses colectivos hoy en día se han complejizado pues transitamos de un mundo fundamentalmente de intereses, que podían haber sido considerados como intereses colectivos, a un mundo de demandas individuales. Este paso está asociado, en parte, al fenómeno de la desagregación o descategorialización de una sociedad y, por otro lado, tiene que ver mucho con el papel que juega la lógica mediática; la exacerbación de demandas que no quieren representación, sino respuestas directas, es decir, políticas públicas. Y la mediación que hay entre las demandas sociales y las políticas públicas no está directamente relacionada con la representación política, sino con el modo en cómo la lógica mediática organiza aquéllas.

En tercer lugar, lo que se representa son ideas o proyectos normativos de sociedad. En tal sentido, la suma de demandas tanto individuales de consumo, así como también la de actores colectivos, muchas veces no apuntan a la transformación de la

sociedad y, por lo tanto, no necesitan una instancia que represente ideas o proyectos.

Esto implicaría que la instancia principal de representación en los regímenes democráticos, los partidos políticos, tienen un debilitamiento en su capacidad de representar, pues estas estructuras políticas no fueron creadas para representar identidades o demandas individuales. Su principal sentido fue la representación de intereses, aspiraciones, ideas de sectores que se traducían en proyectos o visiones de sociedad. Por lo tanto, los partidos como forma de organización política tienden a perder importancia en la construcción de Estado y sociedad.

Dicho debilitamiento, anteriormente señalado, también se expresa en la dinámica electoral como mecanismo de representación. La fluctuación y la variabilidad en general en el voto hace que éste hoy día sea mucho más una respuesta inmediata de oposición a una situación que un mecanismo que asegure una relación de representación entre gobernantes y gobernados.

Así, junto a una crisis de legitimidad de la idea de representatividad –de actores, de intereses y de proyectos– existe una crisis orgánica de la relación entre representantes y representados. Ello lleva a cuestionar la capacidad que tiene el representante de asegurar la representación. Pero este problema de representación debe mirarse en dos dimensiones: la del representante al representado y viceversa. Porque uno de los problemas fundamentales en la actualidad tiene que ver con que se debilita la base de lo representable. Quienes constituyen potencialmente lo representable son masas, sectores, grupos, públicos que no son representables, que no quieren ser representados o que quieren representarse a sí mismos. Por lo tanto no es que la clase política no represente a la ciudadanía, sino que simplemente hay sectores que no pueden o no quieren ser representados. Y, por lo tanto, los partidos políticos sólo pueden representarse al final a sí mismos, a su clase política, a sus militantes, produciendo una autonomización del campo político separado de la base social que legitima su autoridad.

Entonces, la mayor parte de los problemas de los partidos políticos están asociados a problemas internos, los que en la mayoría

de las sociedades actuales parecieran no funcionar como partidos, ni tampoco operan como partidos de masas. Como ha sido señalado por diversos autores, estamos en presencia fundamentalmente de coaliciones o de segmentos de partidos, más que de partidos en el sentido clásico. Esto último se explica, entre otras cosas, porque las ciudadanía en América Latina son, como las ha llamado Rosanvallon, “instantáneas” o inmediatas: realizan un reclamo que requiere una solución que no necesariamente se liga en torno a un proyecto con aquel que lo represente, estableciéndose una disociación entre las bases sociales y quien se supone que las representa.<sup>2</sup>

La crisis de la idea de representatividad, o bien la crisis de la relación entre representantes y representados, enfrenta un complejo problema: representar una base difícilmente representable, lo que en términos teóricos desafiaría la naturaleza del sistema democrático. Igualmente, hay sistemas que se acercan más a resolver la crisis de representación que otros. En este sentido, un sistema parlamentario tiende a resolver mejor los problemas de representación en la medida que, por la disposición del jefe de Estado, se puede disolver el sistema de representación elegido por otro que, obviamente no va a representar proyectos de sociedad, pero va a representar las demandas de ese momento, con lo que se estrecha la distancia entre ciudadanía y clase política.

Hacia finales de los años noventa y comienzos de la década del 2000, en América Latina parecieran haber en juego varios modelos de reconstrucción de la *polis*, de recomposición de las relaciones entre Estado y sociedad, como respuesta a la crisis de representación, a partir del hecho fundamental que, por primera vez en nuestra historia, esto se hace prácticamente en todas partes desde regímenes democráticos. Uno, es el modelo de la hipermovilización política, de la permanente movilización política a través de ciertas formas de caudillismo ahí donde se habían destruido las organizaciones políticas de mediación como los partidos, lo que pareciera ser el caso venezolano. Un segundo modelo es el modelo étnico, que identifica el “nosotros” de una particularidad

2 Ver Cheresky (2006).

con el conjunto de la nación y que sería el caso boliviano. Un tercer modelo es el modelo chileno y uruguayo, donde la sociedad se reconstruye a través del sistema de partidos. Un cuarto modelo es el tecnocrático, estilo Banco Mundial, donde lo que importa es la eficiencia del Estado en el desarrollo de políticas públicas que complementen el mercado como agente principal de desarrollo. Por último, está lo que podríamos llamar el modelo alter-mundialista que se expresa en las proposiciones del Foro Social de Porto Alegre y que aparece más como una crítica global que como un diseño de re estructuración de las relaciones entre Estado y sociedad.

Varias de estas situaciones parecieran entrar en una fase de agotamiento o inflexión,<sup>3</sup> en tanto en el caso chileno, el salto post democratización a nuevas relaciones entre Estado y sociedad, solo se plantea a partir de 2011 con movilizaciones sociales y el triunfo de Michelle Bachelet y la coalición Nueva Mayoría en 2013 y su ascenso al gobierno en 2014.

### Sistema político y movimientos sociales en Chile

Los movimientos sociales son un tipo de acción colectiva, y no necesariamente la única forma de la acción colectiva. En tal sentido, la acción colectiva que realizan los movimientos sociales goza de un tipo de densidad organizacional y una cierta duración en el tiempo, que muchas veces se plantea la conservación de un tipo de sociedad o bien la transformación de la sociedad en su conjunto, o de un ámbito dentro de ella.

Esta breve clarificación permite adentrarnos en lo que llamamos movimientos sociales, donde al menos existen tres dimensiones que son relevantes para el análisis del caso chileno. Por un lado,

<sup>3</sup> Sobre una evaluación de estos modelos y gobiernos de izquierda, cuyo significado a nuestro juicio era la búsqueda del salto a nuevas relaciones entre Estado y sociedad, "Contrapuntos en torno a los nuevos gobiernos progresistas de América Latina", en *Temas y Debates*, 2010, Rosario, Año 14, Número 20.

está aquel tipo de acción que tiene al movimiento de algún modo como su propio referente, es decir, el sentido de la acción es la constitución de un sujeto social. Pero también existe una segunda dimensión que es de naturaleza instrumental o reivindicativa, que puede referirse a demandas o medidas concretas o que puede tener como objeto el intento de fortalecer la organización. Finalmente, una tercera dimensión es la política, que algunos autores llamarían, desde la sociología, la dimensión de historicidad, es decir, aquel aspecto que va más allá de la búsqueda como sujeto, que va más allá de la demanda concreta y que apunta a la transformación de la sociedad o de un ámbito de ella.

Este concepto de movimiento social hay que distinguirlo del concepto de sociedad civil, en la medida que éste último apunta a un cierto entramado de la sociedad. Se pueden tener muchas definiciones de sociedad civil, la que engloba tanto las dimensiones de actores y movimientos, ciudadanía y tejido asociativo. Ello lleva a la gran discusión de qué entra y qué no entra en este concepto, puesto que existen autores clásicos como el mismo Marx, que hacen entrar en la sociedad civil las contradicciones de clase que se dan en su interior, otros autores que incluyen en ella la esfera del mercado, mientras otros consideran a la sociedad civil como antagonista al Estado y no ponen, por ejemplo, a las mafias como parte de la sociedad civil.<sup>4</sup> Se puede tener incluso movimientos sociales sin tener sociedad civil. Ello indicaría que la sociedad civil es una esfera de interacción social de mediana y larga duración principalmente de carácter estructural. En cambio, los movimientos tienden a ser mucho más de tipo temporal. En todo caso, lo que nos parece fundamental, más que la taxonomía descriptiva de la sociedad civil, es el análisis sobre el modo cómo ella se constituye en cada sociedad, lo que equivale para nosotros a estudiar cómo se constituyen los sujetos y actores sociales. Ello que obliga a una hipótesis general para cada caso histórico –las sociedades civiles no son lo mismo en cada sociedad–, lo que formularemos para el caso chileno.

<sup>4</sup> Una completa discusión sobre las significaciones de la sociedad civil en Cheresky (2006) y en Panfichi (2002).

La hipótesis general sobre cómo se construyen o bien cómo se constituyen los movimientos sociales o el sujeto social en Chile o, si se prefiere, la sociedad civil, parte de la idea de que no hay un verdadero desarrollo de la sociedad civil en Chile desde los años treinta del siglo pasado. En tal sentido, se puede afirmar que hay una ausencia de movimientos sociales estrictamente autónomos, pues la acción colectiva fue siempre el resultado de la imbricación entre estructuras partidarias y organización social o factores sociales.<sup>5</sup> Y esto es un elemento fundamental, porque no es igual en el resto de América Latina. En los años treinta se termina de constituir en Chile un sistema partidario completo con muy poca participación electoral. Es decir, con baja participación, hay un espectro amplio y consolidado de partidos de derecha, los tradicionales Conservador y Liberal, de centro, principalmente el Partido Radical y en los años sesenta el Demócrata Cristiano, y de izquierda, principalmente Socialista y Comunista que, junto a otros menores, representan todas las opciones ideológicas de la época, los nombrados con representación electoral en el Congreso y todos ellos con acceso a la Presidencia entre 1938 y 1973.<sup>6</sup> De modo que incorporarse a la sociedad, a los bienes y servicios del Estado y a la política como fuente de sentido, en el marco de un sistema democrático, significaba básicamente optar por una u otra de las alternativas partidarias. Es decir, los movimientos “dentro” del sistema político partidario y no “frente” o al margen de él. Es lo que hemos llamado la imbricación del sistema partidario con la organización social o, hace mucho tiempo, el sistema partidario como “columna vertebral” de la sociedad.<sup>7</sup> Lo expresado esquemáticamente sirve para entender lo que va a ocurrir en dos momentos: durante la dictadura militar y en la democratización política.

El primer momento corresponde a lo que ocurre post golpe militar de septiembre de 1973, instalada la dictadura liderada

5 Ver Garretón (2000). Una visión distinta en Salazar (1985). Una crítica a esta última propuesta en Grez (2005).

6 Ver Valenzuela (1995).

7 Ver Garretón (1987).

por el Gral. Augusto Pinochet, de carácter altamente represivo, que persigue inicialmente a los sectores sociales y políticos que habían apoyado el gobierno socialista de Salvador Allende y, luego, a toda acción política que se considere opositora al régimen, aunque se hubiera apoyado o haya sido neutral frente al golpe. Y en ese momento, evidentemente no hay movimiento social como tal. Lo que hay son procesos por los cuales las antiguas organizaciones que estaban en la época democrática movilizadas en defensa del gobierno de Allende, van a pasar a clandestinidad y algunas a buscar refugio en instancias eclesiásticas que proveen no sólo un espacio físico, sino que aparecen como el único poder visible enfrentado al dictador.<sup>8</sup> Los partidos, movimiento social y organizaciones sociales van a tener como acción fundamental la búsqueda de sobrevivencia y, en años siguientes, las resistencias al modelo transformador del régimen militar. Es decir, la acción colectiva de oposición tendrá dos referentes. Por un lado, la lucha contra la represión, contra el aspecto autoritario del régimen, en el que el movimiento de derechos humanos, también social y político, jugará un papel emblemático. Pero también la otra lucha, por la defensa de las conquistas socio-económicas que se habían tenido hasta entonces. No olvidemos que se había llegado a un gobierno que buscaba el socialismo, al que siguió la dictadura. Y ello es especialmente importante porque que no se trata sólo que el tipo de régimen introduce restricciones para la acción colectiva, sino también el tipo de sociedad que busca imponerse.

Cuando se produce una importante crisis económica en 1982, primer fracaso del modelo económico introducido por la alianza Pinochet-“Chicago Boys”,<sup>9</sup> se inicia, a partir de entonces, un ciclo de tres años de protestas y de movilizaciones permanentes, entre las cuales la huelga clásica no constituye la herramienta principal dado el alto nivel de desempleo y las difíciles condiciones para su realización. Lo que se implanta como forma principal de acción colectiva es la protesta. Y ella tiene muy diversas formas

8 Ver Garretón (1989).

9 Ver Valdés (1995); Vergara (1984).

de manifestarse, desde golpear ollas como se hiciera en la época de rechazo a la Unidad Popular por parte de sectores medios y altos, lentificar el trabajo, manifestaciones relámpago en las calles, petitorios de demandas sectoriales y globales, huelgas de hambre en casos muy calificados, movilizaciones estudiantiles, barricadas en las poblaciones de los sectores más radicalizados, es decir, cada sector social adopta la forma más adecuada a su situación.<sup>10</sup>

El problema fundamental pasó entonces a ser cómo se transforma la mayoría social en política y cómo se le dice a los movimientos sociales que el plebiscito de Pinochet (1988) no va a ser fraudulento, después que toda la acción y el discurso opositor se había basado en la afirmación fundada que al gobierno militar no había que creerle nada. Entonces hay de nuevo un reciclamiento de la relación entre partidos y movimiento social, donde esta vez la dirección la toman los partidos; es el momento partidario. Y se trata entonces simplemente de entrar en el plebiscito y poner una serie de condiciones para asegurar el triunfo de la opción "no" a la continuidad de Pinochet.<sup>11</sup>

Existe una visión crítica que postula que una vez llegada al poder, la coalición de centro-izquierda Concertación de Partidos por la Democracia (Partido Demócrata Cristiano, Radical Social Demócrata, Socialista y Partido por la Democracia) va a desmovilizar, y algunos dirán traicionar, a la sociedad civil movilizadora para la lucha contra la dictadura y el plebiscito. A nuestro juicio, se trata de una visión inadecuada. El problema es que la democracia que se inaugura en el año 1990 es una democracia con la presencia de enclaves autoritarios, entre ellos, la Constitución del año ochenta, el Comandante en Jefe del ejército es Pinochet, mayoría para la oposición de derecha por el sistema electoral y los senadores designados, y, por otro lado, un modelo económico-social funcionando.<sup>12</sup>

10 Ver De la Maza y Garcés (1985).

11 Ver Garretón (1988).

12 Para la noción de enclaves autoritarios, ver Garretón (1995).

Y entonces, la Concertación tiene sus márgenes de maniobra limitados. Pero también lo ven así el movimiento sindical, estudiantil y los nuevos movimientos que han ido surgiendo en los últimos años de la dictadura, con la excepción quizás del movimiento de derechos humanos, y de aquellos vinculados al Partido Comunista. Ya hemos dicho que entre partidos –en este caso los de la Concertación– y movimientos no hay una total separación sino formas de imbricación más complejas que tendrán como eje común, a partir de la instalación del régimen democrático, evitar una regresión autoritaria y priorizar la estabilidad económica. Así, por primera vez se encuentra el movimiento social o los movimientos sociales con que su instrumento de constitución, que es el sistema partidario de centro-izquierda –con la excepción del Partido Comunista que será el que va a capitalizar el clásico “desencanto democrático”–, está en el gobierno. Y entonces se encuentra un movimiento sin su instrumento. Y ese es el inicio de lo que llamaríamos el debilitamiento de esa imbricación entre sistema partidario y actores sociales.

Entonces, al momento partidario de la acción colectiva que caracteriza la situación de transición le sigue uno caracterizado por el paso de los partidos a la administración del gobierno, y la separación consiguiente de la lógica partidaria-gubernamental y la lógica movimientista, ambas unificadas en cierto modo en los últimos años del régimen militar. Ello se acompaña de la relativa aceptación por parte de los movimientos más clásicos, como el sindical o el estudiantil, que a su vez sufren escisiones internas entre quienes logran integrarse en los procesos de modernización y quienes pasan a situaciones de subordinación o exclusión, de moderar demandas que no sean las estrictamente relacionadas con cambios en el marco institucional autoritario que entraba su acción. El tipo de acción colectiva de estos sectores en los primeros años de democracia se relaciona, principalmente, con el reclamo por una mayor intervención estatal en su área de actividad, lo que privilegia la movilización de los trabajadores vinculados a éste.

En cuanto a los movimientos nacidos o desarrollados bajo la dictadura se produce una institucionalización parcial de sus

demandas, la que adquiere dos formas principales. Una es la generación de Comisiones Nacionales destinadas a la institucionalización de demandas de los movimientos nuevos emergidos durante la dictadura, especialmente, en el caso del tema de los derechos humanos como la Comisión Verdad y Reconciliación, conocida como la Comisión Rettig, creada en el gobierno de Patricio Aylwin, el primer presidente, y que se continuó con la Mesa de Diálogo bajo el presidente Frei y la Comisión Valech sobre detenciones políticas bajo la dictadura, conocida como Comisión sobre la Tortura, bajo el presidente Lagos. En este caso de los derechos humanos, la judicialización de los casos de violaciones bajo la dictadura también forma parte de esta institucionalización. La otra forma de institucionalización es la creación de organismos en el Estado destinados a elaborar políticas que satisfagan demandas de movimientos como el medio ambiental (Comisión Nacional del Medio Ambiente) y, más adelante, de género (Servicio Nacional de la Mujer), juveniles (Instituto de la Juventud), étnicos (Comisión Nacional de Desarrollo Indígena) y también diversas Comisiones Nacionales.<sup>13</sup>

Si bien hay que considerar la creación de estas instancias como grandes avances en el campo respectivo y como un reconocimiento estatal a los movimientos que de una u otra manera les dieron origen, hay que señalar que los mayores avances de las políticas dependen de la fuerza y persistencia de los movimientos sociales de cada campo para mantener sus reivindicaciones y autonomía. Esta institucionalización produce, en un primer momento, una cierta desmovilización seguida posteriormente por el descontento frente a la precaria institucionalidad que se genera debido a las negociaciones con la derecha heredera de la dictadura que mantiene un fuerte poder de veto, y también frente a la insuficiencia de las políticas. Ello constituye la dinámica principal de los movimientos sociales, más bien movilizaciones, lo que lleva a su fragmentación en la medida que se orientan principalmente a reacciones específicas frente al Estado.

13 Sobre los movimientos sociales post transiciones democráticas en América Latina, ver Eckstein (2001).

De este modo, lo que caracteriza a los movimientos sociales en la época post autoritaria es la búsqueda de una nueva relación con la política, básicamente la partidaria, caracterizada por una mayor distancia y tensión, su relativa "especialización" en cada campo y, por lo tanto, fragmentación. Si bien el movimiento de derechos humanos, el mapuche y el ambientalista, logran muchas veces poner temas que involucran a toda la sociedad y mantienen su vigencia, su relación con los actores políticos, con excepción del primero, es compleja y no logran proyectar una visión o proyecto de conjunto, como fueron el movimiento nacional popular, el de las reformas de los años sesenta o el democrático bajo la dictadura.

En síntesis, los movimientos sociales en Chile bajo la dictadura y en el proceso de transición democrática heredan el rasgo fundamental de su constitución histórica cual es la imbricación con el sistema político partidario, pero en condiciones de represión, ausencia de espacios institucionales y fuertes transformaciones estructurales. Pese a ello se desarrolla un movimiento social central o eje, que es el movimiento democrático, cuyo principal referente concreto son los movimientos y organizaciones de derechos humanos y que le da sentido a los nuevos movimientos como pobladores, mujeres y otros. En el momento mismo de la transición, dado el mecanismo impuesto de un plebiscito, prima la dimensión partidaria. Durante un largo período post transición los temas de la democratización incompleta impregnaron la acción colectiva de los diversos actores sociales y poco a poco las demandas específicas se fueron imponiendo por encima de un sentido general que los atravesara a todos. Ello aumentó la distancia entre movimientos y partidos sin que se logre aún una completa recomposición de esta relación. Con excepciones, los movimientos quedan entregados tanto a procesos de institucionalización a través de las políticas públicas e instancias de participación estatal restringida, como a movilizaciones sectoriales y coyunturales, fenómeno que sufrirá un vuelco a mediados de la década del 2000, como veremos.

Todo ello generó un panorama donde la noción misma de movimiento social tiende a perder relevancia, siendo en general reemplazada por ciudadanía o actores de la sociedad civil, lo que



necesariamente tiene, en el primer caso, una connotación más individualista y, en el segundo, se pierde la connotación conflictiva y propositiva de transformaciones profundas de la sociedad. Ello no quita que todos los avances que se hayan producido en el proceso de democratización tienen detrás un movimiento o movilización social, más autónomos que en otra época respecto del sistema partidario pero también con menor impacto en el cambio de la institucionalidad heredada.

Como insinuamos más arriba, a mediados de la década del 2000 aparecen dos movimientos nuevos que parecen anunciar una nueva época de la acción colectiva que, sin desprenderse totalmente de las reivindicaciones estrictamente relacionadas a completar la democratización, se orientan también a otros temas de transformación profunda de la sociedad. Se trata del movimiento de estudiantes secundarios en 2006 y de la movilización de los trabajadores sub contratistas del cobre en 2007. Ambos, más explícitamente el primero, a partir de demandas muy concretas y específicas y con formas de movilización que implican una nueva relación con la política, plantean un cuestionamiento a la institucionalidad y el sentido, respectivamente, de la educación y el trabajo. Pero la solución a los conflictos y movilizaciones planteados por estos actores se resuelve normalmente con la generación de instancias asesoras o deliberativas con participación de los sectores involucrados que, dada la correlación de fuerzas en el Parlamento, terminan distorsionando las posiciones del movimiento social y legitimando las posiciones derrotadas por éste.<sup>14</sup>

El movimiento estudiantil, principalmente universitario pero con significativa participación de estudiantes en 2011, posee un componente nuevo: por un lado, tiene un poder y una capacidad de convocatoria inédita en Chile, con manifestaciones muy similares a las movilizaciones de la época de la dictadura y, además, sus demandas de reforma al sistema de educación superior no pueden hacerse sino en condiciones que implicarían, insoslayablemente, un cambio en el sistema político institucional. De acuerdo a esto

14 Ver Garretón, Cruz y Aguirre (2012).

último, sus demandas pueden ser clasificadas en tres niveles de refundación: del sistema educacional y del modelo social y económico, del modelo político y de las relaciones entre lo político y lo social.

De algún modo, las movilizaciones de todo tipo en 2011 y 2012 –estudiantes de educación superior y secundarios, medioambientales, regionales, diversidad cultural–, marcan una ruptura con la relación clásica entre sistema político y movimiento social que ya no podría volver a repetirse en sus anteriores formas. Las razones que explican la imposibilidad de esta imbricación clásica entre lo político y lo social no necesariamente están asociadas a la significativa disminución en la cantidad de votantes en Chile, lo que se expresó, por ejemplo, en las elecciones municipales de 2012 y presidenciales y parlamentarias de 2013, sino que se comprende, fundamentalmente, porque los movimientos sociales ya no se expresan a través de un *sujeto político partidario y social*, como lo fueron el Frente Popular a finales de los años treinta del siglo XX, la Democracia Cristiana y la Unidad Popular en los sesenta y setenta, y la Concertación y el PC durante la dictadura y los años noventa.

Ante el déficit de legitimidad de los partidos políticos de centro-izquierda y el grave problema de representación que a todas luces advierte una crisis del sistema político, surgen preguntas de naturaleza estructural que manifiestan un problema de fondo: ¿quién hace la transformación del modelo socioeconómico y del modelo político, sino un nuevo sujeto político y social?

Esta transformación de orden estructural, este salto post democratización que vivieron la mayoría de los países latinoamericanos y a lo que nos hemos referido más arriba, que en el caso chileno consiste en superar la sociedad post-pinochetista encadenada por el modelo económico social e institucional a la sociedad de la dictadura,<sup>15</sup> lo tiene que hacer otro sujeto político y social que, como se señaló, no será el sistema de partidos regenerado, ampliado y modificado. Sin embargo, lo que también es relevante

15 Ver Garretón (2012).

destacar es que se comprobó en 2011 y 2012 que tampoco va a poder ser el propio movimiento social con prescindencia del sistema de partidos.

En tal sentido, lo que se produce es la necesidad de pensar en un sujeto, el conjunto de actores políticos y el conjunto de organizaciones sociales autónomas, en torno a un eje común que no se constituye por simple agregación o síntesis. Antes bien, esta alianza es por defecto un problema muy complejo de resolver que tomaría, eventualmente, un tiempo considerable, pues la disociación entre el mundo político y el mundo social ha producido enormes desconfianzas y distanciamientos, que deben recomponerse a través de esfuerzos y voluntades políticas de corto, mediano y largo plazo.

Actualmente existe la posibilidad de repensar un sujeto político-social cuya tarea es muy similar a lo que fue la lucha contra la dictadura, pero en un escenario totalmente distinto. El anterior sujeto político y social logró organizar, en términos de una meta, al conjunto de reivindicaciones contra el modelo político y social de la dictadura. Esto, finalmente, se expresó en el triunfo del "no", lo que dio origen a la recuperación de la democracia. Hoy se trata de la ruptura con las dos cadenas que atan la sociedad actual a la sociedad de la dictadura: modelo socio-económico y modelo político-institucional. Los dos grandes riesgos son el narcicismo movimientista anti partidos, y la rutina de la clase política que piensa resolver sus problemas solo con sus propias prácticas (elecciones, negociaciones, etc) sin vinculación con los movimientos. Durante el año 2013 cristalizó en muchos sectores la idea de un proceso constituyente como el espacio para esta reconstitución entre movimientos y política institucional, lo que provocó una fuerte discusión tanto por parte de aquellos sectores que representan el mantenimiento del orden heredado de la dictadura y que se oponen a cualquier cambio significativo de la Constitución de 1980, como incluso de algunos sectores al interior de la coalición que llegará al gobierno en 2013 como Nueva Mayoría (formada por los partidos de la Concertación más el Partido Comunista y algunos partidos menores) que se oponen al mecanismo de Asamblea Constituyente.

## **Las elecciones de 2013 y el nuevo ciclo político en Chile ¿Hacia nuevas relaciones entre lo político y lo social?**

En Chile se inició un ciclo histórico en 1990 cuya problemática central era la democratización política luego de la dictadura y la superación de los problemas socio-económicos más flagrantes como la pobreza. El sujeto principal de este problemática, como hemos señalado para toda la historia de Chile del siglo XX y el actual, era una coalición de partidos imbricados con actores sociales (la Concertación) y su tarea se realizaba a través del gobierno. En la oposición se ubicaban, por un lado, las fuerzas de apoyo político a la dictadura expresadas en la derecha y poderes fácticos (militares, que más de una década después volverán a sus tareas, corporaciones empresariales, medios de comunicación, poder judicial en un inicio), todos los que gracias al sistema institucional heredado contaban con un poder de veto para evitar que se desmantelara la sociedad heredada de la dictadura. Por otro, aunque importantes en la lucha contra la dictadura y partidarios de la democratización política, sectores políticos y sociales de izquierda excluidos del sistema institucional y que no compartían las limitaciones del proyecto democratizador de la coalición en el gobierno.

El balance de este ciclo, que se agotó en los últimos gobiernos de la Concertación sin haber culminado el proceso de democratización, ha sido señalado múltiples veces. El país se transformó y modernizó, creció económicamente, mejoró la calidad de vida de su población, especialmente de sus sectores más afectados por las políticas de la dictadura, se amplió la cobertura de los servicios estatales, se superó en gran parte la pobreza. Pero hemos señalado que la sociedad permaneció atada a la dictadura por dos grandes cadenas. La primera, el modelo socio-económico neoliberal caracterizado por producir y reproducir desigualdades y segregaciones; una enorme concentración del poder, la riqueza y la comunicación; y el predominio del mercado y lo privado en todos los ámbitos de la vida social por sobre el interés público, reduciendo y debilitando la acción del Estado. La segunda, un modelo político-institucional consagrado principalmente en la

Constitución impuesta por la dictadura en 1980, pero también en una amplia gama de normativas que se deducían de aquélla, que reproducen el empate entre las fuerzas de la dictadura y las fuerzas democráticas para asegurar la intangibilidad del modelo socio-económico. Los gobiernos de la Concertación corrigieron tanto el modelo socio-económico neoliberal como el modelo político institucional pero no los superaron y, en esa medida, contribuyeron a consolidarlos. Y entretanto se fue erosionando también el sistema de relaciones entre lo político y lo social que había caracterizado a la sociedad chilena desde inicios del siglo pasado.

Cuando se habla de nuevo ciclo de la política en Chile se corre el riesgo de banalizar su significado identificándolo con cambios de gobierno o en la correlación de las fuerzas políticas. Si bien estos elementos suelen estar presentes cuando se abre un nuevo ciclo histórico, lo que define a éste es la aparición de una nueva problemática histórica y de nuevos sujetos políticos y sociales que se hacen cargo de esta problemática. Dicho de otra manera, cambia lo que está en juego en la sociedad. Y en este sentido puede no haber una correspondencia entre un nuevo ciclo histórico y los actores gubernamentales o de oposición que pueden corresponder al ciclo anterior, es decir, la emergencia de un nuevo ciclo es paralela al agotamiento y término del anterior y ambos tienden a coexistir por tiempos más o menos largos.

Antes que terminara el ciclo de los gobiernos de la Concertación se anunciaba un nuevo ciclo histórico con las movilizaciones de 2011 y 2012.<sup>16</sup> Y ello porque quedaron planteados una nueva problemática y un nuevo proyecto histórico, ilustrados en el campo educacional pero que abarca todos los ámbitos de la vida social (trabajo, modelo productivo, energía, inserción en América Latina, recursos naturales, papel dirigente el Estado, diversidad cultural, relación del Estado con las regiones y pueblos originarios, internacional) para superar la sociedad post pinochetista en su dimensión socio-económica neo liberal y en su dimensión político institucional, para generar una sociedad integralmente

16 Ver Rojas (2012); Garcés (2012).

democrática e igualitaria con predominio de lo público y estatal sobre el mercado en todos los campos y construir una nueva relación entre lo político y social. Como hemos dicho, se trataba de dar el salto que casi todos los países de América Latina habían dado después de sus procesos de democratización política y que en Chile no había ocurrido.

Aunque el anuncio de un nuevo ciclo viniera por primera vez del mundo social y no del mundo político, era evidente que él no podría desencadenarse sin la intervención de este último. Con más o menos problemas, tanto los partidos de la Concertación, con un proyecto agotado, como el Partido Comunista, marginado hasta entonces de la institucionalidad política, entendieron, en el marco de las coyunturas electorales de 2013, la necesidad de generar una nueva coalición política de centro izquierda (la Nueva Mayoría) para ganar el gobierno y el Parlamento, de modo de desencadenar efectivamente este nuevo ciclo. Sectores fuera de esta coalición también han mostrado su voluntad de participar en este nuevo ciclo histórico, aunque no está claro el modo cómo se integrarán. Desde la asunción de la candidatura presidencial y liderazgo de esta coalición, Michelle Bachelet, a través de la campaña, en su programa de gobierno y en sus declaraciones y proyectos emblemáticos de reforma tributaria, reforma educacional, cambio en el sistema electoral, anuncio de nueva Constitución, como Presidenta en los primeros meses, ha mostrado su voluntad y decisión encabezar el nuevo ciclo y no ceder a las presiones contrarias a ello desde la derecha, algunos sectores de la Nueva Mayoría y aquéllos que desconfían de cualquier aspecto que venga de la institucionalidad política y de la política electoral. Pese a ello, las elecciones significaron una de las más bajas participaciones electorales en la historia política del país.

Pero si bien las movilizaciones de 2011-2012, la formación de nuevas coaliciones partidarias, las elecciones presidenciales y la abrumadora mayoría de Bachelet entre quienes votaron, la mayoría en el Congreso de su coalición de gobierno, el clima cultural consagrado en las conmemoraciones de los cuarenta años del golpe militar, la presencia de nuevos actores políticos y sociales, nos

Constitución impuesta por la dictadura en 1980, pero también en una amplia gama de normativas que se deducían de aquélla, que reproducen el empate entre las fuerzas de la dictadura y las fuerzas democráticas para asegurar la intangibilidad del modelo socio-económico. Los gobiernos de la Concertación corrigieron tanto el modelo socio-económico neoliberal como el modelo político institucional pero no los superaron y, en esa medida, contribuyeron a consolidarlos. Y entretanto se fue erosionando también el sistema de relaciones entre lo político y lo social que había caracterizado a la sociedad chilena desde inicios del siglo pasado.

Cuando se habla de nuevo ciclo de la política en Chile se corre el riesgo de banalizar su significado identificándolo con cambios de gobierno o en la correlación de las fuerzas políticas. Si bien estos elementos suelen estar presentes cuando se abre un nuevo ciclo histórico, lo que define a éste es la aparición de una nueva problemática histórica y de nuevos sujetos políticos y sociales que se hacen cargo de esta problemática. Dicho de otra manera, cambia lo que está en juego en la sociedad. Y en este sentido puede no haber una correspondencia entre un nuevo ciclo histórico y los actores gubernamentales o de oposición que pueden corresponder al ciclo anterior, es decir, la emergencia de un nuevo ciclo es paralela al agotamiento y término del anterior y ambos tienden a coexistir por tiempos más o menos largos.

Antes que terminara el ciclo de los gobiernos de la Concertación se anunciaba un nuevo ciclo histórico con las movilizaciones de 2011 y 2012.<sup>16</sup> Y ello porque quedaron planteados una nueva problemática y un nuevo proyecto histórico, ilustrados en el campo educacional pero que abarca todos los ámbitos de la vida social (trabajo, modelo productivo, energía, inserción en América Latina, recursos naturales, papel dirigente el Estado, diversidad cultural, relación del Estado con las regiones y pueblos originarios, internacional) para superar la sociedad post pinochetista en su dimensión socio-económica neo liberal y en su dimensión político institucional, para generar una sociedad integralmente

16 Ver Rojas (2012); Garcés (2012).

democrática e igualitaria con predominio de lo público y estatal sobre el mercado en todos los campos y construir una nueva relación entre lo político y social. Como hemos dicho, se trataba de dar el salto que casi todos los países de América Latina habían dado después de sus procesos de democratización política y que en Chile no había ocurrido.

Aunque el anuncio de un nuevo ciclo viniera por primera vez del mundo social y no del mundo político, era evidente que él no podría desencadenarse sin la intervención de este último. Con más o menos problemas, tanto los partidos de la Concertación, con un proyecto agotado, como el Partido Comunista, marginado hasta entonces de la institucionalidad política, entendieron, en el marco de las coyunturas electorales de 2013, la necesidad de generar una nueva coalición política de centro izquierda (la Nueva Mayoría) para ganar el gobierno y el Parlamento, de modo de desencadenar efectivamente este nuevo ciclo. Sectores fuera de esta coalición también han mostrado su voluntad de participar en este nuevo ciclo histórico, aunque no está claro el modo cómo se integrarán. Desde la asunción de la candidatura presidencial y liderazgo de esta coalición, Michelle Bachelet, a través de la campaña, en su programa de gobierno y en sus declaraciones y proyectos emblemáticos de reforma tributaria, reforma educacional, cambio en el sistema electoral, anuncio de nueva Constitución, como Presidenta en los primeros meses, ha mostrado su voluntad y decisión encauzar el nuevo ciclo y no ceder a las presiones contrarias a ello desde la derecha, algunos sectores de la Nueva Mayoría y aquéllos que desconfían de cualquier aspecto que venga de la institucionalidad política y de la política electoral. Pese a ello, las elecciones significaron una de las más bajas participaciones electorales en la historia política del país.

Pero si bien las movilizaciones de 2011-2012, la formación de nuevas coaliciones partidarias, las elecciones presidenciales y la abrumadora mayoría de Bachelet entre quienes votaron, la mayoría en el Congreso de su coalición de gobierno, el clima cultural consagrado en las conmemoraciones de los cuarenta años del golpe militar, la presencia de nuevos actores políticos y sociales, nos

hablan al menos del término del ciclo anterior, no nos aseguran que efectivamente un nuevo ciclo se produzca y desarrolle. El país puede caer en una fase en que se empantanen las reformas debido a la oposición de derecha y los poderes fácticos y mediáticos, a las debilidades de algunos de los sectores en el gobierno y el rechazo de un sector movimientista radicalizado, todo lo cual generaría la percepción que las cosas siguen igual contribuyendo a que cada vez más lo político y lo social se separen, se desconozcan o renieguen el uno del otro. Y ello se reflejará no sólo en indicadores socio-económicos sino en una degradación de toda la vida social.

¿Cómo reconoceremos que ya estamos en pleno nuevo ciclo histórico, caracterizado a la vez por la radicalidad de sus contenidos y por la coherencia de su implementación? En la medida que día a día vayan desapareciendo los rasgos de la sociedad heredada de la dictadura, en cuya superación consiste el nuevo ciclo, en que día a día disminuyan la desigualdad y el poder del mercado en los diversos ámbitos de la vida social y aumente el predominio de lo público, en que día a día se vaya transformando la institucionalidad heredada y en que día a día se vayan recomponiendo, a través de nuevas formas las relaciones entre lo político y social.

En esto, el cumplimiento del programa de gobierno, la aprobación de leyes por el Congreso, el apoyo de los partidos y todas las fuerzas democráticas que no están en el gobierno y las movilizaciones de la sociedad, son indispensables. Pero no bastan para romper las inercias ni generar las confianzas de los que no creen en la política ni obligar a los poderes fácticos a aceptar la voluntad democrática. A nuestro juicio, la prioridad de sentido, no necesariamente temporal aunque no puede dejarse pasar mucho tiempo sin que se diluya el clima favorable al nuevo ciclo, deben tenerla las nuevas relaciones entre Estado, política y sociedad que se establecen en una nueva Constitución. No cabe aquí volver a argumentar a favor de ella, porque todos saben que es la institucionalidad actual la que bloquea el traspaso al nuevo ciclo y nos mantiene encadenados a ciclos anteriores. Más allá de la necesidad de una nueva Constitución, que parece ser consensual salvo para minorías recalcitrantes o para quienes desconfían de la política,

hay que insistir en que ella es el eje vertebrador de todos los cambios. Pero no sólo por los contenidos que se establezcan sino porque el proceso que lleve a ella es el único que puede asegurar la reconstrucción de la comunidad política y la identificación de la ciudadanía con el orden político institucional, es decir, la resolución de la crisis de representación. Y en este sentido, no hay otra forma de llegar a una nueva constitución legítima que una Asamblea Constituyente. Al mismo tiempo es la única fórmula que genera un espacio de encuentro entre el mundo social y el mundo político, entre lo institucional y lo participativo, permitiendo la rearticulación de sus relaciones y el respeto de sus autonomías.

Hay que reconocer que algunos sectores se oponen a una Asamblea Constituyente, otros se sienten alejados de esta idea, no porque la rechacen sino porque desconocen de qué se trata. En este sentido, lo que parece entonces más adecuado es llamar a la ciudadanía a pronunciarse sobre esta idea a través de un plebiscito y concentrar las energías iniciales en reformas y movilizaciones que permitan un plebiscito en torno precisamente a la cuestión de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente. No olvidemos que en el imaginario de los chilenos y chilenas existe el plebiscito como el gran instrumento para terminar con una dictadura ¿por qué no puede serlo para terminar con sus herencias después de más de veinte años de su término?<sup>17</sup>

No habrá nuevo ciclo histórico ni solución de la crisis de representación, más allá de declaraciones y buena voluntad, sin desencadenamiento de un proceso constituyente como lo han tenido todos los países que han recuperado su democracia.

## Bibliografía

Cheresky, Isidoro (compilador) 2006 *Ciudadanía, sociedad civil y participación política*, Buenos Aires: Miño y Dávila Ediciones.

17 He desarrollado estos puntos en Garretón (2013a).

- Cheresky, Isidoro 2006 "La ciudadanía y la democracia inmediata", en Isidoro Cheresky (compilador) *Ciudadanía, sociedad civil y participación política*. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.
- Eckstein, Susan 2001 "Epílogo: ¿Qué ha sido de todos los movimientos sociales latinoamericanos en vísperas del nuevo milenio?", en Susan Eckstein (coordinadora) *Poder y protesta popular. Movimientos sociales latinoamericanos*, México: Siglo XXI.
- Garcés, Mario 2012 *El despertar de la sociedad. Los movimientos sociales en América Latina y Chile*, Santiago: LOM.
- Garretón, Manuel Antonio 1987 *Reconstruir la política. Transición y consolidación democrática en Chile*, Santiago: Editorial Andante.
- Garretón, Manuel Antonio 1988 *El Plebiscito de 1988 en Chile y la transición a la democracia*. Cuadernos de Difusión, Santiago: FLACSO.
- Garretón, Manuel Antonio 1989 "La oposición política y el sistema partidario en el régimen militar chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición", en Marcelo Cavarozzi y Manuel Antonio Garretón (editores) *Muerte y Resurrección. Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones en el Cono Sur*, Santiago: FLACSO.
- Garretón, Manuel Antonio 1995 *Hacia una nueva era política. Estudio sobre las democratizaciones*, México: FCE.
- Garretón, Manuel Antonio 2000 *La sociedad en que vivi(re)mos. Introducción sociológica al cambio de siglo*, Santiago: LOM, Santiago.
- Garretón Manuel Antonio 2011 "Movilizaciones y movimiento social en la democratización política chilena" en Rafael Quirosa-Cheyrouse y Muñoz *La sociedad española en la transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador*, Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.
- Garretón, Manuel Antonio 2012 *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile (1900-2010)*, Santiago: CLACSO/ARCIS.

- Garretón, Manuel Antonio; Cruz, María Angélica y Aguirre, Félix 2012 "La experiencia de los consejos asesores presidenciales en Chile y la construcción de los problemas públicos", en *Revista Mexicana de Sociología*, México, Año 74, Número 2, Abril-Junio.
- Garretón, Manuel Antonio 2013 "El nuevo esfuerzo. Plebiscito para una nueva Constitución" en *Plebiscito para una nueva Constitución*, Santiago: El Desconcierto.
- Garretón Manuel Antonio 2013a "Progresismo y la refundación de la relación Estado-sociedad", en Fortín, Varas y Mella *Los desafíos del progresismo. Europa, América Latina y Chile*, Santiago: RIL Editores.
- Garretón Manuel Antonio 2014 "Plebiscito para una Asamblea Constituyente", *Le Monde Diplomatique*, Santiago, Año XIV, Número 150, abril.
- Grez, Sergio 2005 "Escribir la historia de los sectores populares. ¿Con o sin la política incluida? A propósito de dos miradas a la historia social (Chile, siglo XIX)", en *Política*, Santiago, Volumen 44, Otoño.
- Panfichi, Aldo (editor) 2002 *Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono Sur*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Rojas, Jorge 2012 *Sociedad bloqueada. Movimiento estudiantil, desigualdad y despertar de la sociedad chilena*, Concepción: RIL Editores.
- Salazar, Gabriel 1985 *Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX*, Santiago: ediciones SUR.
- Valdés, Juan Gabriel 1995 *Pinochet's Economists: The Chicago School of Economics in Chile*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Valenzuela, Samuel 1995 "Orígenes y transformación del sistema de partidos en Chile". Santiago, *Estudios Públicos*, Número 58.
- Vergara, Pilar 1984 *Auge y caída del neo-liberalismo en Chile*, Santiago: FLACSO.